



San José de Cúcuta, Veintisiete (27) de Junio dos mil dieciocho (2018)

PROCESO	RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS
RADICADOS	54-001-31-21-001-2015-00075-00 A
SOLICITANTES	ILVA ROSA TORO
DECISIÓN	SE ORDENA ADJUDICAR PREDIO A LA SOLICITANTE ANTE AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y SE RECONOCE COMO VICTIMAS. R. DECHOS LEY 1448 delm 2011.

1. ASUNTO A TRATAR

Procede este despacho a proferir sentencia que en derecho corresponda dentro de la solicitud de la referencia, siendo solicitante la señora ILVA ROSA TORO, respecto del predio rural denominado **“La Esperanza”** ubicado en la Vereda Cerro de las Casas – Corregimiento de Otaré – Municipio de Ocaña – Norte de Santander, a lo cual se procede luego de los siguientes:

ANTECEDENTES

La solicitud de Restitución y Formalización de Tierras recae sobre el predio rural denominado **“La Esperanza”** ubicado en la vereda cerro de las casas del corregimiento de Otaré- municipio de Ocaña - Norte de Santander, con una cabidad superficiaria de 4 hectáreas 7301 metros cuadrados; predio que se encuentra contenido en uno de mayor extensión identificado con numero predial No. 00-08-0007-0063-000, sin folio de matricula inmobiliaria y con una cabida superficiaria de 26 hectáreas 5625 metros cuadrados, siendo solicitado por la señora ILVA ROSA TORO.

Las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con el desplazamiento y consecuente abandono forzado del predio objeto de restitución, fueron narradas por la peticionaria así:

2. SÍNTESIS DE LOS CASOS

HECHOS RESPECTO A LOS SOLICITANTES

Manifiesta la señora ILVA ROSA TORO, que el predio lo compro su esposo OSCAR EMILIO CASTRO a su padre JOSE ARTURO MEJIA, hace más de 35 años por un valor aproximado de 50 mil pesos, haciendo un documento de compra venta realizándole mejoras al lote construyendo una vivienda donde Vivian y cultivaban en la finca sembrando cebolla frijoles, yuca y plátano; indican que se vieron obligados abandonar el predio en el año 2002 vendiendo la vivienda a un menor precio de lo que valía para esa época desde que inician a pernotar en el mismo todo era tranquilo hasta el año d 2003, que empezaron a llegar los paramilitares que

con ataques a la población civil, los intimidaron provocando el desplazamiento hacia agua chica donde sus suegros, al año siguiente deciden retornar nuevamente al predio y desde entonces todo ha transcurrido con normalidad hasta la actualidad.

SOLICITANTE

Nombre	Identificación	Edad	Estado Civil	Fecha de vinculación con el predio	Tiempo total de vinculación	Calidad que ostentaba
Ilva Rosa Toro	27.661.216	56		1.984	30 años	Poseedora

NUCLEO FAMILIAR

Javier Castro Toro	88.284.870	36				
Uber Castro Toro	1.978.808	34				
Dio angel Castro Toro	5.470.168	33				
Yaneth Castro Toro	37.182.967	29				
Delfa Castro Toro		25				
Dilia Castro Toro		23				
Nahun Castro Toro	1.091.671.991	20				
Rosa Elvira Castro Toro		17				
Edgar Castro Toro		14				
Giovanny Castro Toro		12				

3.- IDENTIFICACIÓN CONCRETA DEL PREDIO OBJETO DE ESTUDIO.

RESULTADOS DE LA GEORREFERENCIACIÓN POR PREDIO

Nombre del Predio	Id_Registro	Código Catastral	Matrícula Inmobiliaria	Área Catastral	Área Georreferenciada	Área Solicitada
La esperanza	142581			26Ha + 5625m2	4Ha +7301m2	15Ha

4. PRETENSIONES

4.1 DE LAS PRETENSIONES – SOLICITANTE ILVA ROSA TORO.

4.1.1 PROTEGER el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras de la señora ILVA ROSA TORO identificada con C.C. No. 27.661.216 De Ocaña; en los términos establecidos por la Corte Constitucional mediante Sentencia T-821 de 2007 y auto de seguimiento N°

008 de 2007. Formalizar en los términos del literal f) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 la relación jurídica de la señora arriba mencionada, sobre el predio descrito en renglones precedentes. Ordenar a la Oficina de Instrumentos Públicos de Ocaña, abrir un nuevo folio de matrícula inmobiliaria para el predio en mención objeto de estudio, con la identificación física y la georreferenciación de la presente solicitud inscribir en el la respectiva declaración de pertenencia sobre dicho predio a favor de la solicitante; Ordenar inscribir la medida de protección jurídica prevista en el artículo 19 de la ley 387 de 1997 y se de aplicación a los artículos 97, 98, 111, 123, 124, 125 y 126 de la Ley 1448 de 2011. Ordenar al IGAC, se dé cumplimiento con lo señalado en el literal p) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.

5. ACTUACIÓN PROCESAL

5.1 ETAPA ADMINISTRATIVA

Se recepciona la documentación para inscribir el predio objeto de restitución en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, se identifica la solicitante de la siguiente manera:

1. ILVA ROSA TORO identificada con C.C. No. 27.661.216 De Ocaña; En calidad de Poseedora, narra los hechos de violencia indicando los motivos que la llevaron a abandonar el predio. Además manifiesta las mejoras y explotaciones realizadas al inmueble.

Aportan como documentación, la fotocopia de la cédula de la solicitante e identificación de su grupo familiar para el momento del desplazamiento.

Además de las anteriores pruebas se recepcionó en el ente administrativo, las siguientes:

- Formato de recolección de información comunitaria línea de tiempo y caracterización social.
- caracterización social Corregimiento de Otaré, mapa veredal de Ocaña, mapa conflicto de OCAÑA, hechos victimizantes.
- Acta de verificación de georreferenciación del predio firmado por el solicitante.
- Documentos análisis de Contexto - DAC.
- Informe técnico caracterización de la solicitante respecto al predio perteneciente al Corregimiento de Otaré Municipio de Ocaña Norte de Santander.
- Apuntes sobre hechos a nivel colectivo.
- Informe técnico de Georreferenciación por el área catastral de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras.
- Resolución N. 1966 de fecha 26 de diciembre de 2014, por la cual se decide sobre la inscripción en el registro de Tierras Abandonadas Forzosamente del predio objeto de estudio, siendo solicitante la señora ILVA ROSA TORO.

5.2 ETAPA JUDICIAL

Este despacho judicial admitió y acumuló las presentes solicitudes mediante auto de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015), por cumplirse con los requisitos exigidos en los artículos 75, 81 y 84 de la ley 1448 de 2011; emitiéndose las respectivas órdenes a las distintas entidades involucradas en este proceso como: Alcaldía de Ocaña, Gobernación de Norte de Santander, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Banco Agrario, Finagro, Bancoldex, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Empresa Colombiana de Petróleos- Ecopetrol, Corponor e Incoder.

El 17 de noviembre de 2015, la apoderada judicial de la parte solicitante allegó la publicación de los edictos respecto a los predios objeto de restitución.

Con proveído de fecha 30 de noviembre del 2015, se ordenó designar como representante judicial de las personas determinadas e indeterminadas a la doctora ELVIA ROSA BUITRAGO, para que fueran representados dentro de esta actuación, contestando la demanda el 21 de enero de 2016.

Con proveído de fecha 30 de junio de 2016, se ordenó acumular la solicitud radicada No. 54001-3121-001-2016-00105-00 al radicado de la referencia.

El 14 de septiembre de 2016, la apoderada judicial de la parte solicitante allegó la publicación de los edictos respecto a los predios objeto de restitución radicado 2016-00105.

- El 24 de marzo de 2017, se declara precluida la etapa probatoria y se corre traslado a las partes procesales por el término de cinco (5) días para que hagan sus alegaciones.

7. CONSIDERACIONES

Dentro de esta actuación y el caso particular, con sus interrogantes tenemos que:

7.1 El Problema Jurídico a Resolver.

Conforme a Las pretensiones, fundamentos de hechos y de derecho expuestos en la solicitud de restitución y el caudal probatorio allegados al proceso, le corresponde a esta judicatura establecer lo siguiente:

Le corresponde a esta instancia establecer si se encuentra probada la condición de víctima de la solicitante y su grupo familiar, la relación jurídica con el predio objeto del proceso y si se cumple a cabalidad los presupuestos constitucionales para acceder a la restitución jurídico material y formalización del predio solicitado a favor de la solicitante, respecto del predio solicitado y demás medidas de reparación integral invocadas.

Conforme a los presupuestos sustanciales consagrados en la Ley 1448 del 2011; específicamente si son víctimas de la violencia, por hechos ocurridos dentro del período establecido en el artículo 75 de la citada ley, si hay relación jurídica con la tierra reclamada y si sufrieron despojo por grupos al margen de la ley.

Para resolver los problemas planteados, este despacho debe tener en cuenta por una parte si se dan los requisitos para proferir una sentencia, es decir competencia y requisitos de procedibilidad; las víctimas, el derecho a la reparación integral y a la restitución de la tierras a favor de las víctimas.

Esta judicatura es competente para decidir de fondo la presente solicitud, de conformidad con lo señalado en el artículo 79, inciso 2º y artículo 80 de la ley 1448 de 2011, en razón a que dentro de este proceso, no se presentó oposición y el predio de marras, se encuentra dentro de la territorialidad de competencia de esta instancia.

El Agotamiento de requisito de procedibilidad, validez del proceso, los presupuestos procesales para resolver de fondo, se encuentran satisfechos a cabalidad, no hay nulidad que invalide lo actuado y deba ser declarada de oficio.

Además, hay constancia que a través de resolución se le reconoció a la solicitante la calidad de víctima y de Poseedora para el momento del desplazamiento y ocurrencia de los hechos, respecto del predio rural objeto de solicitud ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña - Departamento Norte de Santander, Estableciendo como tiempo la influencia armada, en esas decisiones, para efectos contemplados en la Ley 1448 del 2011, el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003, con relación al inmueble y conforme lo señala el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011 en el inciso 1º, en concordancia con el artículo 18 del Decreto 4829.

Víctimas:

Tenemos que en la presente actuación está demostrado que la solicitante fue víctima del conflicto armado que se vive en este país, toda vez, que fue desplazada junto a su grupo familiar por grupos armados al margen de la Ley para el año 2003, en razón a que los grupos paramilitares llegaron a la vereda Cerro de las Casas, causando homicidios, amenazas, extorsiones, hurtos y desalojos a familias de ese sector situación que originó abandono de las tierras de las veredas que conformar el Corregimiento de Otaré por temor y miedo a las represalias de estos grupos con todos los habitantes del sector ya que manifestaban que las familias eran colaboradoras de la guerrilla.

7.2 Marco Normativo Aplicable a la Acción de Restitución de Tierras.

Esta judicatura tomará como referencia las normas aplicables a la acción de restitución de tierras, en especial aquellas que conforman el bloque

de constitucionalidad, las cuales introducen estándares internacionales aplicables al desplazamiento y despojo de tierras; se hará énfasis a la justicia transicional y se enunciarán los principios de la Ley 1448 del 2011, el contexto de violencia en el Municipio de Ocaña- Corregimiento de Otaré, el caso concreto, existencia del hecho generador del abandono forzado o despojo, el daño de los reclamantes y la relación jurídica de los solicitantes con el predio.

7.3.- Bloque de Constitucionalidad.

El Artículo 9 de la Constitución es claro al indicar que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia, disposición concordante con los artículos 93 y 94 de la Carta Magna.

El artículo 93 indica:

Los tratados o convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y se prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalece en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretan con los tratados internacionales ratificados por Colombia.

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en los estatutos de Roma adoptados en 1998, por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, radicar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La Admisión de un tratamiento diferente en las materias sustanciales por parte del Estatuto Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él.

El artículo 94 de la Constitución señala:

“La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana no figuren expresamente en ellos”

Estos preceptos fueron el fundamento para que la jurisprudencia constitucional desarrollará lo que fue llamado Bloque de Constitucionalidad, mediante el cual se incorporan a la Constitución los tratados y convenios internacionales sobre los derechos humanos que no pueden ser suspendidos durante los estados de excepción, siempre que fueran sido ratificados, constituyendo estas normas de derechos vinculantes para todas las autoridades en aplicación del principio Pacta Sunt Servando, pero principalmente para los jueces en sus fallos, y además prevalentes conforme a lo previsto en el artículo 4 superior¹.

Es así como el Estado Colombiano integró al texto constitucional los llamados sistemas constitucionales de protección de derechos humanos (SIPDH), estos son: el Sistema Universal de Protección de los Derechos

¹ El artículo 94 también habla de los derechos innominados.

Humanos de las Naciones Unidas, con sus mecanismos convencionales² y extra convencionales, que de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, tiene por objeto el logro de la libertad, la justicia y la paz, con base en el reconocimiento de la dignidad humana y la igualdad de derechos³, paralelamente, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (IDH) y la Corte IDH.⁴

En forma congruente en el artículo 27 y 34 de la Ley 1448 se establece el conocimiento de la prevalencia de los referidos instrumentos de derecho internacional, como el compromiso de respetar los tratados y convenios internacionales que hacen parte del bloque constitucional.

7.3.1 Estándares Internacionales relativos al Derecho de las Víctimas a la Reparación Integral.

En la Resolución No. 147 del 24 de Octubre del 2005 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los principios de directrices básicos sobre los derechos de las víctimas de violaciones graves manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

Entre otros que la reparación integral debe comprender por lo menos, la restitución, que consiste en restablecer a la víctima de su situación anterior, lo cual incluye el regreso a su lugar de residencia y la restitución de sus bienes, la indemnización, que es la compensación por todos los perjuicios; la rehabilitación, que comprende la recuperación mediante atención médica y psicológica y la satisfacción y garantía de no repetición.

7.3.2 Principios Rectores de Los Desplazamiento Internos.

Como consecuencia del aumento considerable de víctimas de conflictos armados y abusos de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encomendó al Sr. Francis M. Deng Servando, la redacción del marco normativo referente a las personas internamente desplazadas, el cual fue presentado a la Comisión en el año 1998, con la advertencia que la responsabilidad por los desplazados corresponde en primer término a los gobiernos nacionales y autoridades locales.

Tales principios son derivación del Derecho Internacional Humanitario, de los Derechos Humanos y de los refugiados; establecen derechos y garantías para la protección de los desplazados en cualquiera de las circunstancias propias del desplazamiento, del retorno o reasentamiento y la reintegración.

² Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Los principios rectores del desplazamiento interno consagrados en el informe del Secretario de las Naciones Unidas para el tema de desplazamiento interno de personas que hacen parte del bloque de constitucionalidad Sentencia T-327 de 2001, reiterado en la T-268 de 2003 y T-419 de 2003

³ Preámbulo

⁴ Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de San José de Costa Rica 1966. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Cartagena 1985.

Los principios proscriben cualquier forma de discriminación en perjuicio de los desplazado a causa de su desplazamiento, por razones de su raza, sexo, lengua, religión, origen social u otro, e igualmente, cualquier interpretación en el sentido de limitar los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario; reafirman el derecho a no ser desplazados arbitrariamente y prohíbe el desplazamiento por motivos étnicos, religiosos o raciales, y la obligación de los estados de proporcionar protección y asistencia humanitaria a las víctimas de ese flagelo.

En cuanto a la restitución, los principios estipulan:

Principio 28.-1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o se han reasentado en otra parte.

2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración.

Principio 29.-1. Los desplazados internos que regresen a su hogar o a su lugar de residencia habitual o que se hayan reasentado en otra parte del país no serán objeto de discriminación alguna basada en su desplazamiento. Tendrán derecho a participar de manera plena e igualitaria en los asuntos públicos a todos los niveles y a disponer del acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.

7.3.3 Principio de la Restitución de la Vivienda y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas.

La Organización de las Naciones Unidas para el año 2005 adoptó en el informe E/CN.4/SV.2/2005-17 los principios para la restitución de viviendas y propiedades de las personas refugiadas, desplazadas siendo solicitada en redacción al relator especial Sergio Paulo Pinheiro. Donde se destacó que el regreso voluntario de los desplazados en condiciones de seguridad y dignidad debe basarse en una elección libre, informada e individual.

Estos principios también, son aplicables a todos los refugiados, desplazados internos y cualquiera que se encuentre en esta situación, quienes tienen derecho que se les restituya viviendas, tierras, patrimonio como medio preferente de reparación, o que se les indemnice cuando sea considerada imposible por un tribunal independiente e imparcial. También hay la posibilidad de establecer presunciones en caso de desplazamientos masivos respecto a la motivación del abandono de establecer mecanismos de indemnización adquirientes secundarios de buena fe. Se establecen el derecho de los refugiados y desplazados a obtener la plena y efectiva indemnización como parte del proceso de restitución cuando esta resulta imposible.

En la sentencia T-821/2007, la Corte Constitucional señaló los principios de la restitución de la vivienda y el patrimonio de los refugiados y de las personas desplazadas hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Más reciente en la sentencia C-715 del 13 de septiembre de 2012 La Corte Constitucional. M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Destacó: MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.- Acciones de restitución de tierras de los despojados. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA VERDAD JUSTICIA Y A LA REPARACION INTEGRAL EN EL MARCO DEL D.I.D.H DERECHO A LA REPARACION DE LAS VÍCTIMAS-Jurisprudencia de la Corte interamericana de Derechos Humanos".

7.4. PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.

El legislador ha establecido principios generales de las víctimas del conflicto armado que han sido desalojadas de sus tierras o forzadas a abandonarlas: la *dignidad*, la *buena fe*, *igualdad*, *debido proceso* y *justicia transicional*, entre otros • *Dignidad. El fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación es el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas.* • *Buena fe.*

El Estado presume la buena fe de las víctimas, permitiéndoles que acrediten el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. • *Igualdad. Las medidas deben reconocerse sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica.*

• *Debido proceso. El Estado debe garantizar un proceso justo y eficaz, enmarcado en las condiciones que fija el artículo 29 de la Constitución Política.* • *Justicia transicional. Refiere a los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de estas violaciones rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas.*

• *Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral deben contar con dicho enfoque. El Estado debe ofrecer especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo, tales como mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado.*

• *Progresividad. El principio de progresividad supone el compromiso de iniciar procesos que conlleven al goce efectivo de los Derechos Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas, e ir acrecentándolos paulatinamente.*

• *Gradualidad. El principio de gradualidad implica la responsabilidad estatal de diseñar herramientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos presupuesta/es que permitan la implementación escalonada de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin desconocer la obligación de Implementarlos en todo el país en un lapso determinado, respetando el principio constitucional de igualdad.*

• *Complementariedad. Todas las medidas de atención, asistencia y reparación deben establecerse de forma armónica y propender por la protección de los derechos de las víctimas. Tanto las reparaciones individuales, ya sean administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas o a los colectivos, deben ser complementarias para alcanzar la integralidad. Publicidad. El Estado deberá promover mecanismos de publicidad eficaces, los cuales estarán dirigidos a las víctimas. A través de estos deberán brindar información y orientar a las víctimas acerca de los derechos.*

7.5- La Ley 1448 del 2011 tiene por objeto el establecimiento de un conjunto de medidas en beneficio de las víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno, dentro de un marco de justicia transicional, que posibilite el efectivo goce de sus derechos a la verdad, justicia y reparación, con garantías de no repetición.

Esta Ley regula lo concerniente a la ayuda humanitaria, la atención, asistencia y reparación de las víctimas con medidas específicas respecto a las poblaciones indígenas y comunidades afrocolombianas; entre otros principios se estableció la presunción de buena fe de las víctimas, garantía del debido proceso, justicia transicional, progresividad, gradualidad, derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, medidas de protección integral a las víctimas, testigos y funcionarios.

En el título IV señala la reparación de las víctimas y respecto de la restitución se precisó que se entiende por esta *“la realización de medida para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley⁵”, fueron establecidas como acciones de reparación de los despojados, la restitución jurídica y material del inmueble, en subsidio la restitución por el equivalente o el reconocimiento de una compensación⁶.*

La mencionada Ley define el despojo como: *“ La acción por medio de la cual aprovechándose de la situación de violencia, se priva adversariamente a una persona de su propiedad, profesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia “ cuya configuración es independiente de la responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil de la persona que priva del derecho como de quien realiza las amenazas o actos de violencia.*

La titularidad al derecho a la restitución fue asignada a las personas que fueron propietarias o poseedoras de los predios, o explotadores de baldíos cuya propiedad que tenga a adquirir por adjudicación que hayan sido despojadas de estas o se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa o indirecta de los hechos que configuran las violaciones de que trata el artículo 3º, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de esta Ley.

El artículo 76 de la ley mencionada, creó el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente como instrumento para restitución de tierras, el cual debe cumplir unos requisitos, es decir se inscribe además de las personas que fueron despojadas u obligadas a abandonar, su relación con éstas precisando los predios, mediante georreferenciación y el periodo mediante el cual se ejerció la influencia armada. La inscripción en el registro constituye requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución autorizada.

1. Contexto del conflicto armado en el Corregimiento de Otaré del municipio de Ocaña- Norte de Santander, respecto al caso concreto.

⁵ Artículo 71 de la Ley 1448 de 2011.

⁶ Artículo 72 de la Ley 1448 de 2011

Generalidades del Corregimiento de Otaré

Está ubicado en la zona montañosa y rural del Municipio de Ocaña, subregión que a su vez, puede ser entendida como una de las puertas de entrada a la reglón del Catatumbo, constituyendo ambos territorios, en epicentro de las más agudas y cruentas confrontaciones socio-políticas, económicas y militares por el acceso a la tierra, que se han librado en el Departamento de Norte de Santander desde mediados del siglo anterior. Cuenta con una población de 418 habitantes en el casco urbano y 1748 en el área rural, para un total de 2166 pobladores. El corregimiento está conformado por el suelo suburbano de Otaré con una extensión superficial de 0.062 km², equivalente al 9.88% del territorio municipal y 12 veredas entre las cuales se encuentran Otaré, Piedecuesta, Carpintero, Cerro Montenegro, San Antonio, Vijagual, El Silencio, Patiecitos, Pueblo viejo, Salobritos, Cerro de las casas y El Guadual. Así mismo, colinda con el corregimiento del Palmar que abarca las veredas Hoyo Hondo y La Yegüera, veredas donde ocurren también hechos de violencia.⁷

Además de la vida rural que giró en torno a la agricultura, se sintió también en Otaré la presencia y paso de grupos armados ilegales como las FARC, el ELN con mayor presencia en la zona y las autodefensas AUC. Esta situación convirtió a Otaré en campo de batalla de actores armados legales e ilegales que ocasionaron serlos daños individuales y colectivos a la comunidad.

El conflicto armado en este corregimiento dejó a su paso profundos daños en las comunidades de Otaré, entre las afectaciones se cuentan homicidios a pobladores, el desplazamiento de familias enteras, el abandono de sus predios, la pérdida de cultivos y animales y la quema de sus propiedades.

Primeras manifestaciones de los Grupos Armados Ilegales en la provincia de Ocaña y Otaré 1980-1985.

En la provincia de Ocaña que incluye al corregimiento de Otaré, el ELN puede ser considerado el grupo insurgente con mayor antigüedad en la zona. En la década de los 80, el accionar de este grupo en el reglón tenía una relación directa con las protestas en contra de las políticas petroleras del momento en el país e inició ataques a la infraestructura petrolera, principalmente al oleoducto caño Limón-Coveñas que pasa por el departamento de Arauca, Norte de Santander, Santander y Cesar⁸.

La campaña "Despierta Colombia nos están robando el petróleo" lanzada por este grupo armado ilegal como una propuesta que reforzaba su oposición a las políticas petroleras del Gobierno y que Incluyó acciones políticas militares contra la infraestructura, sirvió de base para el nacimiento

⁷ Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos Internacional Humanitario (2012) Panorama Actual de Norte de Santander.

⁸ Defensoría del pueblo Situación social y ambiental de la región del Catatumbo- Norte de Santander. Resolución Defensoría

del frente de guerra Nororiental que a su vez alberga otros frentes políticos y militares como lo son el Camilo Torres en el sur del Cesar, el Armando Cagua Guerrero en el Catatumbo con Influencia en la provincia de Ocaña.

La guerrilla del ELN fortalece su accionar en la zona límite entre Cesar y Norte de Santander, en donde se ubica el corregimiento de Otaré, desde Inicios de la década de los ochenta a través del Frente de Guerra Nororiental con extorsiones a las empresas petroleras extranjeras, a las cadenas productivas relacionadas con la palma, la ganadería y las agriculturas tecnificadas de las sabanas cesarienses, además de los secuestros de ahí la Influencia que tuvieron las acciones de este grupo especialmente en Otaré dada su proximidad con el Cesar.

Por otro lado la guerrilla de las FARC Inició también sus operaciones en el Departamento de Norte de Santander en la década de los ochenta, en el contexto del cambio de estrategia militar mediante el desdoblamiento de frentes, con lo cual se pasaba de una posición defensiva a una propuesta ofensiva, más versátil según las necesidades que para ese momento de la confrontación. Identificó ese movimiento Insurgente en el marco de la Séptima Conferencia, realizada en 1982, cuya directriz fue expandirse a través del Bloque Oriental por la cordillera del mismo nombre, para llegar y controlar la frontera con Venezuela A Las FARC tienen presencia en la zona de la provincia de Ocaña desde los años 80 aunque su consolidación se daría en años posteriores con el negocio de la coca y su expansión en el Sur de Bolívar, así como en el Catatumbo.⁹

Para el caso específico de Otaré, sus habitantes cuentan que efectivamente en esta zona hubo presencia de las FARC, quienes pasaban por el sector recorriendo las trochas y caminos, constituía un corredor de entre el Cesar y Norte de Santander. El ELN también hizo presencia y con mayor Intensidad.

El accionar del ELN se registra en la memoria de la comunidad de Otaré aproximadamente hacia el año 1985, momento a partir del cual los pobladores comienzan a sentir los rigores del conflicto armado a través de acciones que ocasionaron infracciones a los derechos humanos así como diversos desplazamientos forzosos Individuales y colectivos. Los habitantes narran como el ELN convocaba a reuniones cada dos o tres meses, donde toda la población tenía que asistir y se daban patrullajes móviles alrededor de todas las veredas

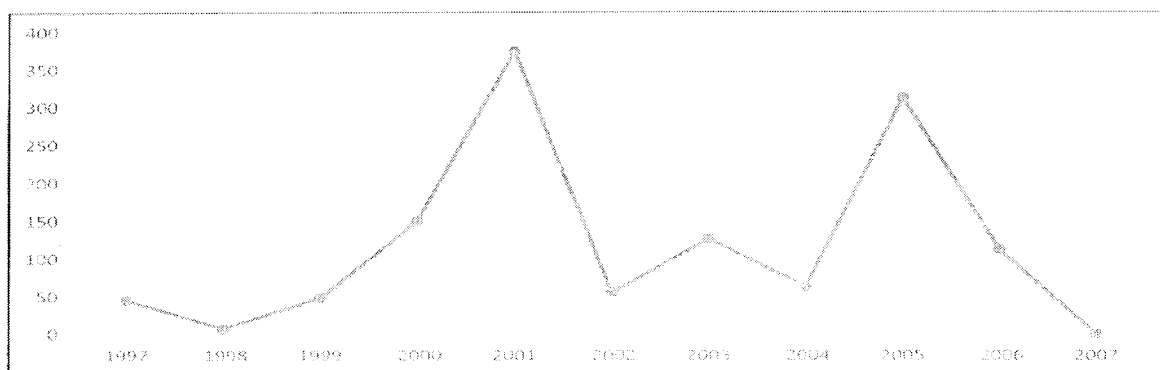
La estrategia paramilitar en Otaré – Frente Héctor Julio Peinado AUC 1996 – 2000.

A partir de 1996 los habitantes de Otaré comienzan a escuchar rumores sobre la presencia de grupos paramilitares de las AUC en municipios y veredas aledañas como El Carmen y Guamalito a 17,4 km de distancia. A partir de este momento los rumores y noticias sobre la muerte de otros

⁹ Documento de la fiscalía 34 delegada ante el Tribunal por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz (2013)

pobladores a mano de los paramilitares, recorrían las veredas de este corregimiento, el miedo crecía entre su gente ya que como ellos mismos lo expresan "*veníán matando gente*".¹⁰ Hacia 1997 y 1998 se lleva a cabo la conferencia nacional, convocada por las AUCC, en donde tuvo lugar la integración de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar dando lugar a la estructura conocida como Autodefensas Unidas de Santander y el Sur del Cesar - AUSAG, que más tarde se dividió por diferencias militares y que dio paso a la formación de dos grupos Independientes, las Autodefensas Unidas de Santander, y las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar- ACSUC, esta última se convirtió en el denominado Frente Héctor Julio Peinado Becerra, que operó en la provincia de Ocaña durante más de una década, bajo el mando de Juan Francisco Prada Márquez alias "Juancho Prada". Desde 1996 hasta el momento de su desmovilización en 2005, se reportaron ataques criminales sistemáticos y generalizados en los departamentos de Cesar y Norte de Santander, la tasa de homicidio en el Municipio de Ocaña entre 1996 y 2006 es de 70628, el desplazamiento forzado cuenta con una cifra de 3058 para este mismo rango de tiempo, estas situaciones respondieron a una política devastadora que iba dirigida en la mayoría de los casos contra miembros de la población civil, señalados, sin fórmula de juicio, como militantes o auxiliares de grupos subversivos, o que causaban algún daño a la sociedad.¹¹

HECTÁREAS ABANDONADAS ENTRE EL 1997 y 2007



9. ANALISIS DEL CASO CONCRETO

9.1 Ley 1448 de 2011 Presupuestos de la Acción de Restitución.

El Artículo 75 de la mencionada ley, la cual se refiere a indicar quienes son los titulares del derecho a la restitución, refiere, "*Las personas que fueron propietarias o poseedoras del predio, o explotadoras de baldío, Cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido despojadas de éstos, o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia directa o indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3 de esta Ley, entre el 1º de enero de 1991 y el término de vigencia de esta ley*".

Esta norma ha identificado unos presupuestos o elementos para que una pretensión de ésta índole pueda despacharse favorablemente. Para ello,

¹⁰ Testimonio de poblador de Otaré ante la UAEGRTD 2014.

¹¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente Malo Fernández.

se requiere: La *relación jurídica del propietario, poseedor u ocupante del solicitante con el predio o parcela que reclama*; ii) *El hecho victimizante constitutivo o configurativo de las infracciones o violaciones que trata el artículo 3 de la ley 1448 del 2011 que motivaron el despojo y/o abandono forzado* iii) *El despojo o abandono forzado de tierras y la relación de causalidad con el hecho victimizante*; y iv) *El aspecto temporal previsto en la ley*.

9.2 Relación Jurídica de la Solicitante con el predio reclamado.

El artículo 81 de la Ley 1448 del 2011, señala que están legitimados para iniciar la acción de restitución de tierras las personas que hace referencia en el artículo 75 de esta misma Ley.

La acción promovida por la solicitante ILVA ROSA TORO, respecto al predio rural denominado "LA ESPERANZA" ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m², el cual fue desplazada en el año 2003.

Conforme lo anterior, esta judicatura estudiará las pruebas obrantes en el legajo, para así poder llegar a la conclusión, si es viable o no acceder a las pretensiones solicitadas; en el artículo 72 de la ley 1448 del 2011 se encuentra reglamentada la RESTITUCIÓN JURÍDICA y MATERIAL DE LAS TIERRAS, requiriéndose como presupuesto para su reconocimiento judicial, la demostración que el solicitante propietario, poseedor, ocupante o explotador de baldíos, haya sido despojado de las tierras o que se haya visto obligado a abandonarlas, como consecuencia directa o indirecta de los hechos que configuren las violaciones individual o colectivamente a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, sufriendo un daño. Hechos que deben tener ocurrencia en el tiempo comprendido entre el 1º de enero de 1991 a la fecha vigencia de esta Ley.

Para determinar, si es viable proteger el derecho fundamental a la RESTITUCIÓN DE TIERRAS, solicitado por la señora ILVA ROSA TORO, respecto del predio objeto de restitución, se analizarán los siguientes interrogantes.

1.- Identificación del Predio.

2.- Que los solicitantes hayan sido despojados de las tierras o que se hayan visto obligados a abandonarlas, como consecuencia directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones individual o colectivamente a los Derechos Humanos o al derecho internacional Humanitario, sufriendo un daño.

3.-Que ese despojo o abandono haya ocurrido a partir del 1º de enero de 1991.

4.-Que se reúnan los requisitos señalados en la ley 160 de 1994 y su decreto reglamentario 2664 de 1994 para otorgar la propiedad de los predios solicitados en razón a que está establecido que son baldíos y por ende adjudicable mediante título traslativo de dominio a través de adjudicaciones por medio de la Agencia Nacional de Tierras (antes INCODER).

Por ende, se examina cada uno de los requisitos:

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO.

El predio objeto de restitución se encuentra ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña de Norte de Santander.

Predio rural denominado "LA ESPERANZA" ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m².

La identificación del predio se encuentra soportada técnicamente por el informe técnico predial, rendido por el Técnico del Área de Catastro de la Unidad de Restitución de Tierras, el certificado de avalúo catastral emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de esta ciudad, quienes son coincidentes en las áreas solicitadas se establece la misma área de terreno.

Así mismo, el juzgado ordenó de oficio el Avalúo Comercial del predio objeto de restitución, quien lo identificó con Áreas y Linderos, dándole un valor al terreno para la fecha de compra, desplazamiento y fecha actual; del cual este despacho corrió traslado a las partes de la actuación, sin presentar objeción alguna a la fecha, por ende, esta judicatura les imparte aprobación y lo declara debidamente ejecutoriado.

PLANO DE GEORREFERENCIACIÓN DEL PREDIO:

PREDIO "LA ESPERANZA"

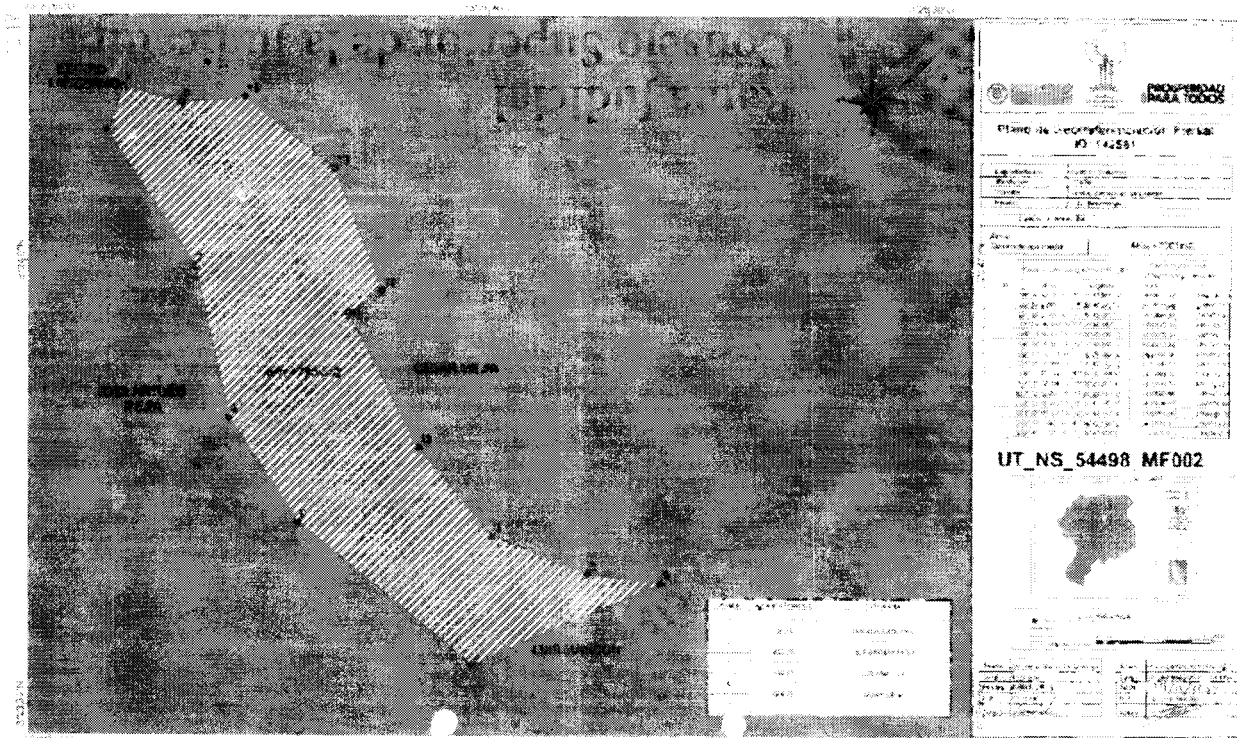
LINDEROS

NORTE:	<i>Partiendo desde el punto 2 en línea recta, en dirección nororiente, hasta llegar al punto 1 con Sergio Lanziano con una longitud de 32.33 mts.</i>
ORIENTE:	<i>Partiendo desde el punto 1 en línea quebrada, en dirección suroriente, pasando por los puntos 0, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, hasta llegar al punto 6 con Cesar Mejía Toro en una longitud de 683.21 mts.</i>
SUR:	<i>Partiendo desde el punto 6 en línea recta en dirección suroccidente, hasta llegar al punto 7 con Luis Mandan quebrada el molino al medio con una longitud de 143.67 mts.</i>
OCCIDENTE:	<i>Partiendo desde el punto 7 en línea quebrada, en dirección Noroccidente, pasando por los puntos 5, 4, 3, hasta llegar al punto 2, con Jose Arturo Mejía con una longitud de 462.35 mts</i>

Coordenadas Geográficas

Punto	Coordenadas Geograficas (WGS_84)		Coordenadas Planas (Magna- Origen Bogota)	
	Latitud	Longitud	norte	Este
0	8° 24' 3.621" N	73° 26' 47.005" O	1420825.17	1069508.17
1	8° 24' 3.951" N	73° 26' 48.321" O	1420835.24	1069467.87
2	8° 24' 2.965" N	73° 26' 48.690" O	1420804.92	1069456.63
3	8° 23' 59.887" N	73° 26' 46.682" O	1420710.46	1069518.22
4	8° 23' 56.497" N	73° 26' 45.920" O	1420606.35	1069541.71
5	8° 23' 54.139" N	73° 26' 44.346" O	1420533.98	1069589.96
6	8° 23' 52.764" N	73° 26' 36.082" O	1420492.16	1069842.89
7	8° 23' 50.930" N	73° 26' 40.401" O	1420435.57	1069710.83
8	8° 23' 52.965" N	73° 26' 37.766" O	1420498.25	1069791.34
9	8° 23' 53.834" N	73° 26' 39.932" O	1420524.84	1069725.02
10	8° 23' 55.823" N	73° 26' 41.619" O	1420585.86	1069673.34
11	8° 23' 58.842" N	73° 26' 43.197" O	1420678.52	1069624.89
12	8° 23' 59.346" N	73° 26' 42.441" O	1420694.05	1069648.01
13	8° 24' 2.095" N	73° 26' 43.505" O	1420778.47	1069615.33
14	8° 24' 3.734" N	73° 26' 45.559" O	1420828.7	1069552.4

PLANO



2.- QUE LOS SOLICITANTES HAYAN SIDO DESPOJADOS DE LAS TIERRAS O QUE SE HAYA VISTO OBLIGADO A ABANDONARLAS, COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LOS HECHOS QUE CONFIGUREN LAS VIOLACIONES INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE A LOS DERECHOS HUMANOS O AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, SUFRIENDO UN DAÑO.

De los elementos materiales probatorios allegados por la Unidad de Restitución de Tierras y las recaudadas en la etapa judicial, se puede concluir que el abandono masivo de las tierras en el sector más exactamente en la Vereda Cerro de las Casas, ocurrió por el seguimiento de los grupos armados al margen de la Ley en contra de la población civil de las diferentes veredas que componen el corregimiento de Otaré; los cuales aparecieron en la década del 1998 al 2007, las víctimas se ven obligadas a abandonar los predios objeto de estudio por el temor, la zozobra de que éstos grupos los victimizaran así como lo habían hecho en las veredas de este corregimiento, obligaron a muchas familias a dejar sus predios, se cometieron diferentes homicidios, hurtos, quemaron viviendas y realizaron tratos inhumanos en contra de la población civil de Otaré.

Circunstancias anteriores, que ocasionaron daños psicológicos y materiales a la familia, ocasionaron privación arbitraria al derecho a vivir, a trabajar, el goce y fruto de los predios; sufrieron daños y perjuicios al tener que huir de sus tierras, el cual era su único bien, donde tenían asentada sus expectativas, proyectos con sus familias, sus hijos, la explotación comercial de las tierras.

Fue un hecho notorio y de público conocimiento las diferentes violaciones sufridas por las familias del corregimiento de Otaré, datan desde los años 90 con las incursiones guerrilleras siendo notorio el desplazamiento de la población de este corregimiento durante los años 2003 dejando en situación de abandono los diferentes predios, hasta que el 80% aproximadamente de la población retornan en un promedio de 2 años, retomando el uso y la explotación de los predios, también masivamente entre el año 2003 y 2008; al abandonar los predios el 100% de los solicitantes perdieron el 100% de los cultivos poseídos, el área agropecuaria utilizada para cultivos como el café, la cebolla, el maíz etc.; además estos desplazamientos llevó a la desintegración familiar igualmente afectó la salud física y mental de sus víctimas y ocasionaron pérdidas económicas por no tener cultivos.

De las argumentaciones anteriores, se infiere razonablemente que están demostrados el segundo y tercer presupuesto, es decir, el ABANDONO y DESPLAZAMIENTO sufrido por la solicitante ILVA ROSA TORO junto con su grupo familiar, donde ha quedado reseñada la circunstancia de tiempo, modo y lugar de la situación vivida por ella en el predio objeto de estudio; así mismo, la temporalidad como lo exige la Ley, se observa que los acontecimientos sucedieron a partir del año 2003 a la fecha.

Para establecer el cuarto presupuesto, es decir que la solicitante acredite su calidad sobre el predio ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del Corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña - Norte de Santander. Además se estudiará si se cumplen los requisitos señalados en la Ley 160 de 1994 y su decreto reglamentario 2664 de 1994.

1.1. Los requisitos para la adjudicación de baldíos conforme a la normatividad vigente

“Los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley”.

El proceso de adjudicación, los presupuesto y los requisitos necesarios para ello, se encuentra regulado por la Ley 160 de 1994, reglamentada por el Decreto 2664 de 1994, modificado por el Decreto 0982 de 1996 y por la Resolución 041 de 1996 por medio de la cual se determinan las extensiones de las Unidades Agrícolas Familiares y su decreto reglamentario 1465 de 2013.

Al respecto, la ley 160 de 1994 establece que *“La propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede adquirirse mediante título traslativo de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades públicas en las que delegue esta facultad.*

Los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa”

Es decir, mientras no se cumplan todos los requisitos exigidos por la ley para tener derecho a la adjudicación de un terreno baldío, el ocupante simplemente cuenta con una expectativa, esto es, la esperanza de que al cumplir con esas exigencias se le podrá conceder tal beneficio. No obstante, quien ostenta materialmente un terreno baldío al cual le ha incorporado mejoras o inversiones y ha sido explotado económicamente, si bien no tiene la calidad de poseedor con las consecuencias jurídicas que de tal condición se derivan, sí tiene una situación jurídica a su favor, esto es, un interés jurídico que se traduce en la expectativa de la adjudicación, la que es merecedora de la protección de las autoridades.

Tales exigencias se encuentran establecidas en Art. 8 del decreto 2664 de 1994 por medio del cual se reglamentó el Capítulo XII de la Ley 160 de 1994 y se dictaron los procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación, éstas son:

- No tener un patrimonio neto superior a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales.

- Haber ocupado y explotado el predio directamente por el solicitante, durante un término no inferior a 5 años. El tiempo de ocupación de un colono anterior, no puede sumarse a la ocupación de quien solicita la adjudicación; es decir, no es transferible a un tercero.
- Demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras (2/3) partes de la superficie cuya adjudicación solicita.
- Que la explotación económica que se adelante corresponda a la aptitud agrológica del terreno.
- No ser propietario o poseedor, a cualquier título, de otros inmuebles rurales en el territorio nacional.
- No haber sido funcionario, contratista o miembro de las Juntas o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la solicitud de adjudicación.

Sumado a lo anterior el predio solicitado debe cumplir con las siguientes características:

- No debe encontrarse en circunstancias específicas que lo harían inadjudicable según lo establece el art 9º del mismo decreto, es decir, No encontrarse ubicado dentro de áreas pertenecientes a comunidades indígenas o negras, a parques nacionales naturales, en reservas forestales, en superficies reservadas para fines especiales como explotación de recursos naturales no renovables o en terrenos que tengan el carácter de bienes de uso público o que hubieren sido seleccionados por entidades públicas para adelantar planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y social del país o de la región.

Siguiendo con las condiciones y requisitos específicos que se deben acreditar dentro de un proceso de adjudicación de baldíos, encontramos el Art. 10 del decreto 2664 de 1994 en el que se señalan circunstancias en las que se prohíbe la adjudicación de tierras baldías, tales como: *“A quienes habiendo sido adjudicatarios de terrenos baldíos, los hubieren enajenado antes de cumplirse quince (15) años desde la fecha de la titulación anterior...”*¹²

De otro lado, el artículo 38 de la ley 160 de 1994 es clara al indicar sobre las constituciones de las unidades agrícolas familiares, su selección y adjudicación que está dirigida a sus beneficiarios y debe ajustarse a las condiciones de requisitos de la entrega que hace el INCODER de la propiedad rural en favor de los interesados.¹³

¹² Ley 160 de 1944 y decreto 2664 de 1994

¹³ Artículo 38 de la ley 160 de 1994

Es clara la normatividad mencionada que la adjudicación de éstas tierras debe ser a personas que cumplan con lo señalado, es decir, hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, que no sean propietarios de tierras, que se hallen en condiciones de pobreza y marginalidad o que se encuentren en especiales condiciones de protección social y económica por causa de la violencia o que sobre el bien se hayan adoptados protecciones en favor de la población desplazada, o que hayan sido objeto de despojo, usurpación y desplazamiento sus legítimos ocupantes por cualquier forma fraudulenta o violenta en la ocupación.

De lo reseñado, se evidencian, que la solicitante cumple con los requisitos que establece la normatividad mencionada para tener derecho a la adjudicación de los terrenos baldíos.

Retomando lo que señala, la Ley 1448 de 2011 en su artículo 74 inciso 5º, creó y reglamentó las ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DESPOJADOS y señala que en *“el caso de bienes baldíos se procederá con la adjudicación del derecho de propiedad del baldío a favor de la persona que venía ejerciendo su explotación económica si durante el despojo o abandono se cumplieron las condiciones para la adjudicación”*. Esta ley, con el fin de proteger y garantizar la materialización de los derechos de las víctimas sobre los predios, hace algunas precisiones en cuanto a los requisitos que deben acreditar las personas que al momento del despojo o abandono se encontraban explotando económicamente un baldío.

Así mismo, el Art. 107 del decreto-ley 19 de 2012, el cual adiciona un párrafo al art 69 de la ley 160 de 1994, establece que en: *“el evento en que el solicitante de la adjudicación sea una familia desplazada que esté en el Registro Único de Víctimas <sic>, podrá acreditar la ocupación previa no inferior a cinco (5) años para tener derecho a la adjudicación, con la respectiva certificación del registro de declaración de abandono del predio. La ocupación se verificará por el INCODER reconociendo la explotación actual sin que sea necesario el cumplimiento de la explotación sobre las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación se solicita”*.

Es evidente, que la persona hoy solicitante en estudio, fue víctima de abandono forzado y que en ese momento, se encontraban ocupando su predio tantas veces mencionado, los cuales son baldíos, y quienes acreditan cumplir con los requisitos de la norma citada para obtener la adjudicación de éstos, en razón a que el término de ocupación de éstos predios es superior a cinco (5) años, interrumpiéndose la mismas por los hechos de los grupos al margen de la ley, lo que no permitió continuar con el goce y usufructo de los terrenos, ocasionándose un perjuicio tanto social, moral y económico a éstas familias campesinas, quienes tenían una expectativa al explotar las tierras, como lo venían haciendo y una vez cumplido los requisitos legales como se exigen para poder reclamar ante las autoridades correspondiente los títulos traslaticios de dominio y así gozar con los diferentes beneficios que les otorga el Estado al tener reconocimiento del título propietarios de las tierras.

Así las cosas, puede colegirse del material probatorio arrimado al proceso, y llegar a la conclusión que el predio objeto de estudio es terreno baldío, el cual debe ser adjudicado por la Agencia Nacional de Tierras (antes INCODER) a la solicitante ILVA ROSA TORO. Además los afectados de este proceso no poseen ningún otro predio o inmuebles rurales, en el círculo de registro de Ocaña y esta ciudad, no hay prueba alguna que hayan sido funcionarios, contratistas o miembros de las Juntas o Consejos Directivos de las entidades públicas que integran los diferentes subsistemas del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino dentro de los 5 años anteriores a la fecha de la solicitud. Aunado a lo anterior, está la propia manifestación que hace el Director Técnico de Tierras Rurales del INCODER ante este despacho, donde señala que los predios objeto de restitución no tienen ningún procedimiento administrativo agrario de clarificación de propiedad, es decir, que los predios no han sido adjudicados.

Se confirma lo anterior, con las propias declaraciones de la solicitante donde confirma como primera medida que hubo un desplazamiento por miedo y zozobra por presencia de un grupo paramilitar en las diferentes veredas del Corregimiento de Otaré para el año 2003, huyendo varias familias del sector quedando los predios abandonados, regresando al cabo de un término de 2 años, y 1 año, encontrando el mismo acabado, desolado y sin cultivos; además indican que tuvieron la ocupación por más de 10 años y de este predio provenía su sustento, donde sembraban cebolla, frijol, café, plátano y caña, es decir, que éstas eran su explotación económica antes de producirse la situación de orden público señalada, la misma que interrumpió el uso y el goce de estas tierras por parte de los ocupantes hoy reclamantes. Además, estos habitantes realizaron diferentes mejoras en cada predio.

Igualmente, se establece con el material probatorio recaudado sobre la adquisición de los predios, que la solicitante ILVA ROSA TORO indica que el predio lo adquiere con su esposo (OSCAR CASTRO) mediante negociación y documento de compraventa que hicieron con su padre (JOSE MEJIA) por el valor de 50 mil pesos, viviendo en el mismo por mas de 37 años, en la actualidad se encuentra habitándolo con su grupo familiar; corroborada esta estas afirmaciones con las declaraciones de Abel Antonio Mandon Trillos y José del Carmen Pérez Uribe, quienes al unísono coinciden en afirmar conocer a la peticionaria con su grupo familiar quienes ocupan el predio desde hace más de treinta años, al comienzo era solo lote y lo han mejorado y explotado con cultivos sembrando frijol, cebolla plátano; testimonios estos que gozan de plena credibilidad para esta instancia demostrándose así la ocupación del predio en estudio por parte de accionante con su grupo familiar.

Premisas anteriores, concluyentes a esta judicatura, para inferir que están demostrados los requisitos sustanciales y procedimentales para acceder a las pretensiones de la solicitud impetrada por la Unidad de Restitución de Tierras, al concluirse del material probatorio, la certeza que los solicitantes y sus grupos familiares fueron víctimas del desplazamiento forzado, producto del conflicto armado que se vivió por grupos al margen de la Ley (paramilitares) con el interés de tomar el dominio de la zona donde se

encuentran ubicados los predios en el Corregimiento de Otaré municipio de Ocaña- Norte de Santander, para los años de 1998 al 2003, cumpliendo así con lo señalado en el artículo 75 de la Ley 1448 del 2011; se estableció el requisito de procedibilidad, adelantado ante la Unidad de Restitución de Tierras de esta localidad, donde se identificaron las víctimas y la legitimación para actuar en calidad de ocupantes, ubicación e identificación de los predios a restituir y formalizar.

En el desarrollo de los procedimientos administrativos y en el transcurso de esta etapa judicial en los traslados y publicaciones emanados por la Ley, no se ejerció oposición por parte de ninguna otra persona o personas diferentes a los aquí solicitantes.

En consecuencia, este despacho judicial reconoce la calidad de víctimas de abandono forzado por desplazamiento a la señora ILVA ROSA TORO identificada con C.C. 13.362.039 No. 27.661.216 de Ocaña Norte de Santander y su hijos Javier Castro Toro, Uber Castro Toro, Dio Ángel Castro Toro, Janeth Castro Toro, Delia Castro Toro, Dilia Castro Toro, Nahúm Castro Toro, Rosa Elvira Castro Toro, y Edgar Castro Toro.

Colorario de lo anterior, se oficia a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se haga los reconocimientos a que haya lugar por concepto de indemnización.

Así mismo, se amparará el derecho fundamental a la Restitución de Tierras al señora: ILVA ROSA TORO identificada con C.C. 13.362.039 No. 27.661.216 de Ocaña Norte de Santander y su hijos Javier Castro Toro, Uber Castro Toro, Dio Ángel Castro Toro, Janeth Castro Toro, Delia Castro Toro, Dilia Castro Toro, Nahúm Castro Toro, Rosa Elvira Castro Toro, y Edgar Castro Toro., respecto al predio rural denominado "LA ESPERANZA" ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m².

Ordenar la restitución del predio objeto de estudio, la cual será en forma simbólica, toda vez que la solicitantes ILVA ROSA TORO identificada con C.C. No. 27.661.216 de Ocaña Norte de Santander y su grupo familiar, se encuentra ocupando el mismo desde hace más de 37 años respecto al predio "LA ESPERANZA" ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m². Sin cedula Catastral y folio de matrícula inmobiliaria.

Además, de lo anterior, se ordena Formalizar la propiedad del predio objeto de restitución tanto de mejoras y terreno dando aplicación a lo señalado en la Ley 160 de 1994, reglamentada por el Decreto 2664 de 1994, modificado por el Decreto 0982 de 1996 y por la Resolución 041 de 1996 y numeral g artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, en consecuencia se ordena a la Agencia Nacional de Tierras- ANT antes INCODER, procedan a dar cumplimiento a esta sentencia y profieran la respectiva resolución de adjudicación respecto al predio rural "LA ESPERANZA" ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m². Sin cedula Catastral y folio de matrícula inmobiliaria, con los siguientes linderos:

NORTE:	<i>Partiendo desde el punto 2 en línea recta, en dirección nororiental, hasta llegar al punto 1 con Sergio Lanziano con una longitud de 32.33 mts.</i>
ORIENTE:	<i>Partiendo desde el punto 1 en línea quebrada, en dirección suroriental, pasando por los puntos 0, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, hasta llegar al punto 6 con Cesar Mejía Toro en una longitud de 683.21 mts.</i>
SUR:	<i>Partiendo desde el punto 6 en línea recta en dirección suroccidental, hasta llegar al punto 7 con Luis Múndon quebrada el molino al medio con una longitud de 143.67 mts.</i>
OCCIDENTE:	<i>Partiendo desde el punto 7 en línea quebrada, en dirección Noroccidental, pasando por los puntos 5, 4, 3, hasta llegar al punto 2, con Jose Arturo Mejía con una longitud de 462.35 mts</i>

Dándose un término de quince (15) días. Para dar cumplimiento a lo acá ordenado.

Una vez cumplido lo anterior, ofíciase a la Oficina de Instrumentos Públicos de Ocaña, para que procedan a abrir el respectivo folio de matrícula inmobiliaria con relación al predio adjudicado “respecto al predio rural “LA ESPERANZA” ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré – Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m². Sin cedula Catastral y folio de matrícula inmobiliaria a nombre de la solicitante señora: ILVA ROSA TORO identificada con C.C. 13.362.039 No. 27.661.216 de Ocaña Norte de Santander y su hijos Javier Castro Toro, Uber Castro Toro, Dio Ángel Castro Toro, Janeth Castro Toro, Delia Castro Toro, Dilia Castro Toro, Nahúm Castro Toro, Rosa Elvira Castro Toro, y Edgar Castro Toro. Así como también las anotaciones y aclaraciones respectivas en el folio de matrícula del predio de mayor extensión., otorgándose un término de quince (15) días, y para lo cual se expedirá copias de esta sentencia.

Se ordena inscribir la medida de protección de restitución de tierras señalada en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, consistente en la prohibición para enajenar en el término de dos (02) años siguientes a este fallo, del predio restituido dándose un término para su cumplimiento de ocho (08) días.

Oficiar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, para que procedan hacer las actualizaciones correspondientes en el sistema, para lo cual se le enviara copia de la respectiva sentencia.

Ordenar la entrega real y material de los predios objeto de restitución, de conformidad con lo señalado en el artículo 100 inciso 2 de la Ley 1448 de 2011, ordenándose a la UAEGRTD, haga esta entrega de forma simbólica, levantando las correspondientes actas con las constancias respectivas.

Se ordenará dar aplicación a los preceptos señalados en el artículo 121 de la Ley 1448 del 2011; y artículo 139 del Decreto 4800 de 2011, decretándose como mecanismos reparativos, en relación al pasivo de la solicitante ILVA ROSA TORO identificada con C.C. No. 27.661.216 de Ocaña Norte de Santander, la condonación de pagos correspondientes al impuesto predial, valorización u otros impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal, respecto de los inmuebles, que se adeuden a la fecha, y la EXONERACIÓN, por los mismos conceptos por un periodo de DOS (2) años, a partir de la fecha de la restitución. Ofíciase al Alcalde del Municipio de Ocaña para que dé cumplimiento a la presente orden, dando

aplicación a lo señalado en el artículo 1 del Acuerdo No. 01 del mes de marzo de 2014.

Se oficiará a la Alcaldía del Municipio de Ocaña, para que se incluya al solicitante en los proyectos productivos sostenibles que estén desarrollando.

Se ordenará a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas (SNARI), a efectos de integrar al solicitante y su núcleo familiar, a la oferta interinstitucional del Estado en materia de reparación integral.

Se ordenará a la Secretaría de Salud Municipal de Ocaña - Norte de Santander o quien haga sus veces verificar la inclusión del grupo familiar de los solicitantes en el Sistema General de Salud.

Se ordenará a la UAEGRTD a través de los programas de proyectos productivos, incluir al solicitante: ILVA ROSA TORO identificada con C.C. 13.362.039 No. 27.661.216 de Ocaña Norte de Santander, respectivamente, en los programas de subsidio familiar de vivienda rural, subsidio integral de tierras (subsidio para la adecuación de tierra, asistencia técnica agrícola e inclusión en programas productivos), proyectos productivos y todos los demás especiales que se creen para la población víctima, a cargo del BANCO AGRARIO o cualquier otra entidad del sector, en forma prioritaria y preferente, igualmente se les vincule a los programas diseñados para la atención, consolidación y estabilización socioeconómica para la población desplazada, a través de línea o cupo especial de crédito para proyectos productivos o empresas de víctimas del conflicto armado interno en Colombia.

Se Ordenará al Servicio Nacional de Aprendizaje - (SENA), incluir al solicitante y su grupo familiares en programas de formación y capacitación técnica y de proyectos especiales para la generación de empleo rural que tengan implementados y que les sirvan de ayuda para su auto sostenimiento.

Se desvinculará de este proceso a la Alcaldía Municipal de Ocaña, Gobernación de Norte de Santander, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Finagro, Bancoldex, Banco Agrario, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Empresa Colombiana de Petróleos- ECOPEPETROL, Corponor, por establecerse que no tienen ninguna responsabilidad sobre los hechos de violencia y abandono de los predios objeto de restitución.

Del cumplimiento de esta sentencia la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, deberá informar a este despacho, en el término de quince (15) días.

Se ordena informar al Centro de Memoria Histórica lo aquí decidido, para que en el marco de sus funciones documente la información de los hechos ocurridos en el Corregimiento de Otaré.

Notifíquese esta sentencia en los términos señalados, en el artículo 93 de la Ley 1448 del 2011 y demás que señala la Ley

Sin más consideraciones por hacer, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

RESUELVE:

PRIMERO: RECONOCER la calidad de víctimas de abandono forzado por desplazamiento a la señora ILVA ROSA TORO identificada con C.C. 13.362.039 No. 27.661.216 de Ocaña Norte de Santander y su hijos Javier Castro Toro, Uber Castro Toro, Dio Ángel Castro Toro, Janeth Castro Toro, Delia Castro Toro, Dilia Castro Toro, Nahúm Castro Toro, Rosa Elvira Castro Toro, y Edgar Castro Toro. Ocurrido en el Corregimiento de Otaré - Vereda Cerro Montenegro para el año 2003 como ha quedado señalado.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental a la restitución y formalización de tierras a los señores: calidad de víctimas de abandono forzado por desplazamiento a la señora ILVA ROSA TORO identificada con C.C. 13.362.039 No. 27.661.216 de Ocaña Norte de Santander y su hijos Javier Castro Toro, Uber Castro Toro, Dio Ángel Castro Toro, Janeth Castro Toro, Delia Castro Toro, Dilia Castro Toro, Nahúm Castro Toro, Rosa Elvira Castro Toro, y Edgar Castro Toro. Respecto al predio rural "LA ESPERANZA" ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m². Sin cedula Catastral y folio de matrícula inmobiliaria.

TERCERO: Ordenar la Restitución del predio objeto de estudio a la solicitante y su grupo familiar ILVA ROSA TORO identificada con C.C. 13.362.039 No. 27.661.216 de Ocaña Norte de Santander y su hijos Javier Castro Toro, Uber Castro Toro, Dio Ángel Castro Toro, Janeth Castro Toro, Delia Castro Toro, Dilia Castro Toro, Nahúm Castro Toro, Rosa Elvira Castro Toro, y Edgar Castro Toro. Respecto al predio rural "LA ESPERANZA" ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m². Sin cedula Catastral y folio de matrícula inmobiliaria.

CUARTO: ORDENAR Formalizar la propiedad del predio objeto de restitución tanto de mejoras y terreno dando aplicación a lo señalado en la Ley 160 de 1994, reglamentada por el Decreto 2664 de 1994, modificado por el Decreto 0982 de 1996 y por la Resolución 041 de 1996 y numeral g artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, en consecuencia se ordena a la Agencia Nacional de Tierras- ANT antes INCODER, procedan a dar cumplimiento a esta sentencia y profieran la respectiva resolución de adjudicación respecto al predio rural "LA ESPERANZA" ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m². Sin cedula Catastral y folio de matrícula inmobiliaria dándose un término de quince (15) días.

QUINTO: ORDENAR a la Unidad de Restitución de Tierras realizar la entrega del predio restituido en forma simbólica procediéndose a levantar la respectiva acta con las anotaciones correspondientes, para lo cual se le otorga un término de quince (15) días.

SEXTO: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ocaña, para que procedan a abrir el respectivo folio de matrícula

inmobiliaria con relación al predio adjudicado “LA ESPERANZA” ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m². Sin cedula Catastral y folio de matrícula inmobiliaria “a nombre de la solicitante y su grupo familiar ILVA ROSA TORO identificada con C.C. 13.362.039 No. 27.661.216 de Ocaña Norte de Santander y su hijos Javier Castro Toro, Uber Castro Toro, Dio Ángel Castro Toro, Janeth Castro Toro, Delia Castro Toro, Dilia Castro Toro, Nahúm Castro Toro, Rosa Elvira Castro Toro, y Edgar Castro Toro, otorgándose un término de quince (15) días, y para lo cual se expedirá copias de esta sentencia.

Se ordena oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ocaña - Norte de Santander, para que realicen las cancelaciones de las anotaciones No. 2,3,4, respecto del folios de matrícula inmobiliaria NO. 270-66698 el cual fue abierto con el fin de ingresar el pedio en el registro de tierras despojadas.

Se ordena inscribir la medida de protección de restitución de tierras señalada en el artículo 101 de la Ley 1448 de 2011, consistente en la prohibición para enajenar en el término de dos (02) años siguientes a este fallo, el pedio restituido, dándose un término para su cumplimiento de ocho (08) días.

SÉPTIMO: ENVIAR copia de esta sentencia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que proceda hacer las actualizaciones y anotaciones correspondientes en la base de datos.

ORDENAR al IGAC abrir la correspondiente cédula catastral respecto r al predio rural “LA ESPERANZA” ubicado en la Vereda Cerro de las Casas del corregimiento de Otaré - Municipio de Ocaña Norte de Santander, con una extensión de 4 Hectáreas 7301 m². Sin cedula Catastral y folio de matrícula inmobiliaria el cual se encuentra debidamente identificado y georreferenciado.

OCTAVO: Ordenar la entrega real y material del predio objeto de restitución, de conformidad con lo señalado en el artículo 100 inciso 2 de la Ley 1448 de 2011, ordenándose a la UAEGRTD, haga esta entrega de forma simbólica, levantando las correspondientes actas con las constancias respectivas; toda vez que se tiene conocimiento que los solicitantes retornaron a los mismos:

NOVENO: Ordenar al Comandante del Departamento de Policía y al Grupo Mecanizado Masa, para que en el ejercicio de su misión institucional y constitucional, presten toda la colaboración y apoyo que se requiere para la materialización y cumplimiento de esta sentencia.

DECIMO: ORDENAR dar aplicación a los preceptos señalados en el artículo 121 de la Ley 1448 del 2011, decretándose como mecanismos reparativos, en relación a los pasivos de los solicitantes: ILVA ROSA TORO identificada con C.C. 13.362.039 No. 27.661.216 de Ocaña Norte de

Santander la condonación de pagos correspondiente al impuesto predial, valorización u otros impuestos, tasas o contribuciones del orden municipal, respecto del inmueble objeto de FORMALIZACIÓN, que se adeuden a la fecha, y la EXONERACIÓN, por los mismos conceptos por un periodo de DOS (2) años, a partir de la fecha de la restitución. Oficiese al Alcalde del Municipio de Ocaña para que dé cumplimiento a la presente orden, dando aplicación a lo señalado en el artículo 1 del Acuerdo No. 01 del mes de marzo de 2014.

DECIMO PRIMERO: OFICIAR a la Alcaldía del Municipio de Ocaña, para que se incluya a los solicitantes en los proyectos productivos sostenibles que estén desarrollando.

DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas (SNARI), a efectos de integrar a las personas restituidas y su núcleo familiar a la oferta interinstitucional del Estado en materia de reparación integral.

DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a la Secretaria de Salud Municipal de Ocaña-Norte de Santander o quien haga sus veces verificar la inclusión del grupo familiar de los solicitantes en el Sistema General de Salud.

DÉCIMO CUARTO: Se le hará saber a los solicitantes, que puede acudir a FINAGRO, BANCOLDEX o las entidades que hagan sus veces, con el propósito de financiar actividades tendientes a la recuperación de su capacidad productiva.

DÉCIMO QUINTO: Se ordenará a la UAEGRTD a través de los programas de la FAO, incluir a los solicitantes: ILVA ROSA TORO identificada con C.C. 13.362.039 en los proyectos productivos sostenibles, respectivamente, en los programas de subsidio familiar de vivienda rural, subsidio integral de tierras (subsidio para la adecuación de tierra, asistencia técnica agrícola e inclusión en programas productivos), proyectos productivos y todos los demás especiales que se creen para la población víctima, a cargo del BANCO AGRARIO o cualquier otra entidad del sector, en forma prioritaria y preferente, igualmente se les vincule a los programas diseñados para la atención, consolidación y estabilización socioeconómica para la población desplazada, a través de línea o cupo especial de crédito para proyectos productivos o empresas de víctimas del conflicto armado interno en Colombia.

DÉCIMO SEXTO: ORDENAR al Servicio Nacional de Aprendizaje – (SENA), incluir a los solicitantes en programas de formación y capacitación técnica y de proyectos especiales para la generación de empleo rural que tengan implementados y que les sirvan de ayuda para su auto sostenimiento.

DÉCIMO SÉPTIMO: Se desvinculará de este proceso a la Alcaldía Municipal de Ocaña, Gobernación de Norte de Santander, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural, Finagro, Bancoldex, Banco Agrario, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Empresa Colombiana de Petróleos-ECOPETROL, Corponor e Incoder, por establecerse que no tienen ninguna responsabilidad sobre los hechos de violencia y abandono de los predios objeto de restitución.

DÉCIMO OCTAVO: Del cumplimiento de esta sentencia la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras deberá informar a este despacho, en el término de quince (15) días.

DÉCIMO NOVENO: ORDENAR informar al Centro de Memoria Histórica lo aquí decidido, para que en el marco de sus funciones documente la información de los hechos ocurridos en el Corregimiento de Otaré.

Notifíquese esta sentencia en los términos señalados, en el artículo 93 de la Ley 1448 del 2011 y demás que señala la Ley

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La Juez,

LUZ STELLA ACOSTA

